

Trama Política

Boletín número 3 del mes de agosto del 2010.

Año 4, número 157

Contenido.

- Contenido..... 2**
- Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias. 3**
- Diálogo por la seguridad. 3**
- Preámbulo..... 3**
 - El ejercicio Diálogo por la Seguridad, comenzó con la sociedad civil. (3/08/2010)..... 4
 - El Presidente Calderón pidió unidad. Las organizaciones formularon muchas críticas. (3/08/2010) 4
 - Ante los expertos, el Presidente reconoció serias fallas en la comunicación. (4/08/2010) 4
 - Hubo polémica entre algunos expertos y el Presidente Calderón. (4/08/2010) 5
- ¿Culminación de una etapa o comienzo de otra nueva? 6**
 - El Presidente pidió información de los delincuentes a los ministros religiosos. (5/08/2010)..... 7
 - Son muchos los decomisos al narcotráfico y un número creciente el de los muertos. (8/08/2010) 7
 - Ante los líderes partidistas, el Presidente afirmó categórico que la guerra no se está perdiendo. (11/08/2010) 8
- El enervamiento de la sociedad, es una realidad lamentable. 9**
 - Es indispensable afectar las finanzas del narcotráfico. (11/08/2010) 10
 - El Presidente Calderón argumentó en contra de la legalización de las drogas. (11/08/2010)..... 11
 - El PRI reclama se pretenda involucrar a miembros de ese instituto político con el crimen organizado, con fines electorales. 11/08/2010)..... 11
- La impunidad evidente genera una gran decepción en la sociedad. 12**
 - Los gobernadores de los estados se mostraron más positivos pero pidieron más recursos. (13/08/2010) 13
- Los partidos de la Oposición no parecieran dispuestos a colaborar, asumiendo su propia responsabilidad. 14**
- Claves del documento 16**
- Fe de erratas. 16**
- Notas al final del documento 16**

Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias.

Diálogo por la seguridad.

Preámbulo.

Restan más de dos años a esta Administración y desde luego podría ser tiempo suficiente para lograr resultados mejores ---si se adoptaran nuevas e imaginativas medidas conducentes a tal fin, instrumentadas con la energía necesaria---, no sólo a nivel de la percepción de la opinión pública sino también en el desempeño concreto y factual del Gobierno Federal y de los muchos otros actores políticos, económicos y sociales que deberían estar involucrados, como agentes corresponsables, en el enfrentamiento de este azote que ---independientemente de su importancia real, medida en número de muertos, cantidad de decomisos de armas bienes y dinero, secuestros, enfrentamientos y sus daños colaterales---, está siendo objeto de observación por parte de toda la sociedad mexicana y de buena parte del mundo, interesadas en su evolución y su eventual culminación con todas las consecuencias políticas que esto supone.

Más claro ni el agua. El PRI no está de acuerdo con el Presidente y no está dispuesto a darle su apoyo en la lucha contra el narcotráfico, como quien dice, ése es problema del gobierno. Además, en la práctica, esa misma actitud ha sido asumida por los gobernadores de ese partido que cuando tienen problemas hacen llamados urgentes al gobierno Federal para que se haga cargo de ellos enviando policías federales, soldados, marinos, recursos económicos y cuanto pueden enumerar en sus solicitudes, dejando sentir, ---no precisamente en forma sobreentendida--- que si los problemas de la violencia y la delincuencia no se resuelven es porque el Gobierno Federal no atiende a sus angustiosos y oportunos llamados de auxilio.

Durante la realización de los encuentros del “Diálogo por la Seguridad” el Presidente admitió, doliéndose, que la información proporcionada por El Gobierno acerca de la violencia era sumamente insatisfactoria. Quizás debido a esas deficiencias, hay una danza de cifras relativas a los homicidios que difícilmente se pueden tomar como las verdaderas. De hecho, en las mismas sesiones de El Diálogo, la PGR afirmó que en lo que va del sexenio habíamos tenido alrededor de 24 mil ejecutados, mientras que el organismo de inteligencia del Estado, el CISEN, (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) mencionó que eran ya alrededor de 28 mil. Una diferencia entre ambas instituciones de alrededor de cuatro mil ejecutados, nada despreciable.

El ejercicio Diálogo por la Seguridad, comenzó con la sociedad civil. (3/08/2010)

El presidente **Felipe Calderón** se dijo dispuesto a perfeccionar la política contra el crimen organizado, por lo que pidió a la sociedad vigilar todos los poderes y todos los niveles de gobierno.

En un diálogo con organizaciones civiles y empresariales, les solicitó también revisar los avances del acuerdo para la seguridad y formular propuestas.

En el encuentro se habló sobre la posibilidad de la legalización de las drogas. **Eduardo Gallo**, presidente de México Unido Contra la Delincuencia, demandó primero "secar las finanzas", y después considerar el paso que están dando California y Colorado, Estados Unidos, en donde se sigue un proceso formal.¹

El Presidente Calderón pidió unidad. Las organizaciones formularon muchas críticas. (3/08/2010)

En lo que fue el arranque de una nueva etapa de diálogo del Gobierno federal con líderes sociales, el Presidente **Felipe Calderón** pidió la unidad de todos los mexicanos para enfrentar la embestida del crimen organizado y, además, apremió a la sociedad a exigir cuentas a las autoridades en materia de seguridad pública.

De hecho, los líderes convocados respondieron con una lluvia de críticas a la estrategia y falta de resultados de la Administración federal y de los Gobernadores.

"Es momento de fortalecer la estrategia con sentido de unidad nacional, de traducirla en una política de Estado que convoque a todos y que incluya a todos", pidió **Calderón**.

Los líderes de las distintas organizaciones le reclamaron a **Calderón** que no se haya hecho lo suficiente en los temas de educación, generación

de empleos y lavado de dinero para mejorar la seguridad pública.

Elías Kuri, de Iluminemos México, criticó el llamado a las organizaciones a unirse y trabajar conjuntamente con el Gobierno federal, pues ésta es una unión (unidad) que los políticos no han conseguido todavía. (Entre ellos mismos).

En tanto, **Orlando Camacho**, de la organización México S.O.S., urgió a una "revolución cívica" y dijo: que son urgentes la reforma penal y retomar los compromisos de mejorar el sistema penitenciario del País y concretar y profesionalizar las unidades antisequestro.²

Ante los expertos, el Presidente reconoció serias fallas en la comunicación. (4/08/2010)

Ante las severas críticas que recibió su estrategia contra la inseguridad, el presidente **Felipe Calderón** admitió que hay deficiencias en la política de comunicación, ya que "no ha sido lo fuerte" de su gobierno, y abrió la puerta a un debate sobre la despenalización del uso de las drogas, sin expresar una opinión a favor o en contra, pero puso énfasis en los inconvenientes de esta alternativa.

Nueve horas después, la Presidencia de la República aclaró en un comunicado que "aun estando en contra de la legalización de las drogas, el presidente **Calderón** no se opone al debate en torno a ese tema".

En la segunda sesión del llamado Diálogo por la Seguridad, participaron 23 expertos en seguridad pública y la mayoría reprochó al Ejecutivo la falta de información de parte del gobierno; asimismo, algunos demandaron que la lucha contra la delincuencia se haga sin causar un alto número de muertes.

Aguilar Camín coincidió con otros expertos en catalogar, como pérdida, la batalla informativa, porque "ustedes, las autoridades, nos tienen a los mexicanos en medio de un tiroteo del que no

sabemos de dónde vienen los tiros”. A partir de ello demandó una política de comunicación seria, consistente y cotidiana.

El mandatario terminó por reconocer esa “deficiencia” y que por eso buscaba “reparar el barco. No hemos sabido explicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor; no tenemos tampoco el control de la información estatal”.

En su intento por justificar la rapidez con que emprendió la guerra contra la delincuencia, **Calderón** argumentó que hicieron el primer operativo de seguridad en Michoacán, porque la entidad lo había solicitado desde 2005.

Además, aseguró que cuando la gente es víctima de extorsión, secuestro o asesinato, “créanme que no hay mucho tiempo para la reflexión y el análisis” ni para dejar que un estado resuelva el problema “como Dios le dé a entender”. Aunque en su primera intervención explicó que esta lucha no puede ser producto “ni de la improvisación ni del azar”.

Calderón aseveró que la violencia permanecerá “un buen rato entre nosotros” después del rompimiento de **Joaquín El Chapo Guzmán** y los **Beltrán Leyva**, lo mismo que de la ruptura del cártel del Golfo-Zetas con La Familia y de la caída de uno de los más importantes líderes del cártel del Pacífico.³

Hubo polémica entre algunos expertos y el Presidente Calderón. (4/08/2010)

Joaquín Villalobos, ex guerrillero en El Salvador y asesor en seguridad, dijo que el tema de la legalización de los enervantes debe abordarse con precaución.

Calderón Hinojosa se incomodó con los comentarios de los expertos e interrumpió al consultor **Eduardo Guerrero**: “¿Qué países han

hecho ese milagro, no, de tener un problema y de poder maximizar la seguridad, de poder reducir a los criminales y no tener violencia?”

El consultor citó el Chicago y Los Ángeles del siglo pasado, pero el Presidente no le concedió razón: “Evidentemente han tenido sus periodos de extrema violencia, aunque sean lugares aislados [...] Jamás fue así ni en Chicago ni en Boston, ni en Miami ni en Nueva Orleans”.

El escritor **Héctor Aguilar Camín**, el periodista **Jorge Fernández** y el académico del Centro de Información y Docencia Económicas (CIDE) **Jorge Chabat** dijeron que el gobierno debe ganar la batalla de la información en su combate al crimen, porque puede perder en los dos ámbitos “y la estrategia pierde legitimidad”, aseguró **Chabat**.

“Creo que ha sido, definitivamente, una gran ausencia, fundamentalmente nuestra, el poderle explicar a la gente la narrativa de lo que está ocurriendo. Lo hemos intentado, pero creo que de las cosas que también han quedado claras es que la parte de la comunicación, de la información del gobierno, no ha sido propiamente lo fuerte. Y creo que es una parte medular”, reconoció el mandatario.

El jurista **Sergio López Ayllón** alertó que en esta guerra antinarco “se está actuando en un vacío jurídico muy peligroso para el Ejército, para la sociedad civil y para el futuro del país [...] es urgente definir cuál es el marco jurídico”.

Mauricio Merino criticó que la Federación pelee con las entidades: “Yo creo, señor Presidente, que no es una buena idea decir que todos los estados fracasan [...] una buena forma de sacar este tema de la pelea electoral es la honestidad de Estado. Usted ha calificado esos diálogos como unos que están en busca de una política de Estado. Para darles estatura de Estado hay que quitarles la estatura partidaria, y para quitarles la estatura partidaria hay que meter a la sociedad en este juego”.⁴

¿Culminación de una etapa o comienzo de otra nueva?

*Volvemos a tocar los temas de la delincuencia organizada y el narcotráfico ---no sólo porque los hechos relacionados con ellos están presentes en nuestra realidad cotidiana a lo largo y ancho del país, y que los Medios de comunicación les conceden una posición destacada en sus coberturas---; sino también porque el Presidente **Felipe Calderón** ha venido realizando a lo largo de las últimas dos semanas un ejercicio de análisis y discusión del tema con amplios sectores de la sociedad, bajo el denominador común de “Diálogo por la Seguridad”, en cuyo seno ha celebrado sendos encuentros con la llamada sociedad civil, comunicadores, líderes religiosos, miembros de los partidos políticos y del Poder Judicial, y gobernadores de las entidades federales.*

Hasta ahora, han sido seis las sesiones y se está efectuando una séptima, misma que presuntamente incluiría a miembros del Poder Legislativo de todos los partidos y que ha sido desairada por varios de ellos.

La Presidencia de la República ha incluido en su página Web una larga relatoría de las intervenciones presidenciales, de los miembros de su gabinete y de los representantes de los seis sectores que fueron convocados a esos encuentros.

*Sin embargo, en los Medios de comunicación, especialmente en la prensa escrita, han sido pocos los análisis de fondo publicados, y en cambio muchas notas han estado saturadas de anécdotas con un enfoque preponderantemente crítico en relación con la realización misma de este largo evento de dos semanas de duración, así como de sus presuntos objetivos y de la actuación del Presidente **Calderón** en él.*

Como los hechos son más elocuentes que las palabras, pareciera evidente, a propósito de estos foros, la inconformidad del Presidente con la percepción que la sociedad ha venido teniendo de la lucha emprendida por él durante los casi cuatro años de su gestión, en la cual, como él mismo ha afirmado en varias ocasiones prevalece la opinión de que la guerra se está perdiendo, que los resultados son negativos a juzgar por los más de veintiocho mil ejecutados en el marco de esta confrontación y que las posibilidades de cambiar esta suerte de aparente fracaso logrando un avance significativo o mejor aún un triunfo contundente, son pocas.

Los problemas de la violencia y la inseguridad pública no son los únicos que el país padece, también tenemos, entre otras, serias dificultades en la economía que no crece, los empleos que no se generan en número suficiente, la pobreza que no sólo está lejos de abatirse sino que por momentos parece crecer, los ingresos fiscales del gobierno que siguen siendo insuficientes, los ingresos petroleros que no repuntan, nuestra calidad educativa que se encuentra en niveles lamentables y las reformas estructurales que están atrapadas en la madeja de los intereses partidistas.

Sin embargo, la violencia de la delincuencia organizada ocupa un lugar preponderante porque parece atentar en forma cada día más preocupante en contra de la gobernabilidad del país, llegando a convertirse en una calamidad que ha servido de pretexto para contaminar severamente nuestra relación bilateral con nuestros vecinos del norte, deformando los enfoques de algunas importantes autoridades norteamericanas destinados a los fenómenos de la migración y de la llamada seguridad fronteriza con costos muy altos para nosotros.

Sin duda, vale la pena detenernos un poco en la glosa de este “Diálogo por la Seguridad” al que tanto tiempo ha dedicado el Ejecutivo.

El Presidente pidió información de los delincuentes a los ministros religiosos.

(5/08/2010)

El presidente **Felipe Calderón** pidió a líderes religiosos información confidencial o secreta de lo que hacen los criminales, porque quiere saber dónde se reúnen y quiénes los protegen.

“A mí sí me interesa saber quiénes son los que cobran las cuotas, a mí sí me interesa saber dónde se reúnen, a mí sí me interesa saber cómo actúan, a mí sí me interesa saber quiénes los cobijan y se coluden con ellos: Ministerios Públicos, jueces, policías, alcaldes o gobernadores. Sí me interesa saber. Y la sociedad sé que lo sabe”.

Admitió que la simple acción de denunciar “genera una condición de vulnerabilidad enorme” porque el ciudadano tiene que dar la cara, su nombre y domicilio, y eso tiene que revisarse en la ley.

Incluso, el mandatario se dijo interesado en “reclutar” en la Policía Federal a los integrantes de dichas comunidades religiosas que quieran defenderse con sus propios medios, porque mientras los gobernadores y los alcaldes le aseguran que nadie quiere entrar a la policía, hay gente con los valores trascendentales que predicán en las iglesias que “tienen un lugar en nuestras fuerzas”.

En la reunión participaron líderes católicos, judíos, de la Iglesia del Nazareno, de las Asambleas de Dios, Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia de Dios en México del Evangelio Completo, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Iglesia Nacional Presbiteriana e Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ante ellos, el Presidente pidió su colaboración como parte de una estrategia de Estado.⁵

Son muchos los decomisos al narcotráfico y un número creciente el de los muertos.

(8/08/2010)

La cifra de ejecutados dada a conocer por el Cisen la mañana del martes 3 contrastó con la ofrecida por **Arturo Chávez Chávez**, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) , apenas el 17 de junio: 24 mil.

Del número de ejecutados ofrecido por el Cisen, más de 90% corresponde a personas vinculadas con el crimen organizado; 6%, autoridades o miembros de las Fuerzas Armadas, y 1% a víctimas inocentes, según dijo **Felipe Calderón** más adelante,

En el informe presentado por el Cisen, **Valdés** detalló el decomiso de 34 mil 699 vehículos, lo que representa 157% más de lo incautado el sexenio anterior.

Por otro lado –dijo **Valdés** –, se decomisaron 84 mil armas, 330 millones de dólares y 441 millones de pesos, cifras sin precedente. Esto, agregó, “ha mermado la capacidad operativa de la delincuencia (sobre todo) si se toman en cuenta las aprehensiones de 20 mil miembros del cártel del Golfo/Zetas; 18 mil del cártel del Pacífico; 12 mil del de Juárez, y 9 mil de los hermanos **Beltrán Leyva**”.

Ante esta perspectiva, **Calderón** exigió la participación de la sociedad, independientemente de la decisión que puedan tomar las fuerzas políticas, legisladores y gobernadores.

Descompuesto al escuchar las propuestas para reorientar el combate a los narcotraficantes hechas durante los Diálogos por la Seguridad, el mandatario advirtió:

“Tenemos una delincuencia organizada y una sociedad desorganizada. Una sociedad, por ejemplo, de la que requerimos información puntual, si se quiere incluso confidencial, secreta, de lo que están haciendo los criminales”, dijo con el rostro enrojecido, elevando el tono de voz y manoteando sobre la mesa.

“Este problema lo está sufriendo la gente más pobre en sus comunidades (...) Y, en ese tema, señores, lo advierto de una vez, yo no voy a ceder. Yo seguiré trabajando hasta el límite de mis fuerzas y hasta el límite de los recursos que la Constitución me otorga como presidente para combatir la criminalidad.”

“No se puede medir la eficacia y la eficiencia. La información debe estar al alcance de todos sobre los delitos que ocurren, dónde y qué se está haciendo”, dijo **Arturo Arango**, investigador del Instituto Ciudadano sobre la Inseguridad.

A este señalamiento se sumó el investigador **Raúl Benítez Manaut**, quien dijo que sí se puede apoyar a **Calderón** en el combate a la delincuencia, pero para ello debe haber una mínima retroalimentación con datos veraces.

Otros académicos e investigadores, como **Sergio López Ayllón**, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), apuntaron que el mayor déficit en la estrategia oficial en el combate a la delincuencia ha sido en el sistema de información.

Calderón reconoció que su gobierno no ha podido comunicar qué pasa y cómo trabaja su gabinete, pero subrayó que no hay una intención deliberada de ocultar datos ni información.⁶

Ante los líderes partidistas, el Presidente afirmó categóricamente que la guerra no se está perdiendo. (11/08/2010)

Para el presidente **Felipe Calderón** la guerra contra el crimen organizado no se ha perdido,

aunque admitió que la percepción generalizada es ésta.

“Entiendo perfectamente y sé que es la percepción, esta afirmación de que la guerra se va perdiendo. No comparto la afirmación, pero comprendo que es una percepción general que creo también el Estado debe combatir”, dijo ante los dirigentes de seis partidos políticos al explicar que en cada batalla con los criminales la victoria corresponde a las fuerzas federales, salvo en las emboscadas.

Mientras, la lideresa priísta, **Beatriz Paredes**, dijo que no se pone en duda que el Estado debe cumplir con su responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos, sino lo que está a discusión es el cómo, alertando sobre la preservación de los derechos humanos y las garantías individuales.

El jefe del Ejecutivo dejó claro que él no utiliza el término guerra, pero aún siendo así, “y si de guerra habláramos”, en los enfrentamientos del Ejército, la Marina y la policía con los grupos delincuenciales, las bajas de los criminales son considerablemente mayores, quizá en proporción de ocho a uno.

“Indefectiblemente, la victoria, digamos, de este enfrentamiento corresponde al gobierno. De tal manera que no es dable hablar de que esa guerra o esa batalla se va perdiendo”, dijo.

En el Diálogo por la Seguridad que sostuvo con los dirigentes de PRI, PRD, PAN, Partido Verde, Convergencia y Nueva Alianza, el Presidente aseguró: “Sí se puede derrotar al crimen organizado”, pero reconoció que la batalla implica “que el escenario de violencia, de enfrentamiento, de bajas, se prolongue, incluso, más tiempo ¿cuánto tiempo? Es difícil saberlo”.

Pero lanzó la advertencia: si toda la energía política en el país se orienta a atacar, cuestionar o a debilitar al Estado, “sí se pierde la legitimidad de su acción, sí se baja la moral de las tropas, de las

policías, pero quien gana ahí no son los partidos políticos, son los criminales”.

Luego de que **Beatriz Paredes** y **Jesús Ortega** le reprocharan el uso electoral de la guerra contra el crimen, el titular del Ejecutivo también dijo que el día en que México cuente con 32 policías estatales y una federal, así como ministerios públicos confiables y eficientes, “ese día estará derrotada la criminalidad”.

Pero también lanzó un par de interrogantes ¿Quién se va a encargar de vigilar estas 32 policías estatales? ¿Qué tal si una de ellas queda en manos de uno de estos criminales?”.

Dijo que su gobierno no tiene claro en qué están de acuerdo todos los partidos y señaló que el primer gran consenso debe ser el combate a la criminalidad y el segundo, que la seguridad pública es corresponsabilidad de todas las

autoridades. “Si alguien considerase que el error del gobierno ha sido combatir a la criminalidad, también es momento oportuno de que lo diga abierta y sinceramente y comparta con la sociedad las razones por las cuales considera que esta premisa fundacional del Estado de Derecho ha dejado de tener vigencia”, dijo el mandatario.

En su intervención, la priísta **Beatriz Paredes**, advirtió que en el debate no hay unanimidad en las fuerzas políticas que participan, y ponerlo de manifiesto ante el crimen organizado podría no ser estratégicamente conveniente.

Expresó su suspicacia de que la utilidad de los debates no sea sólo mediática y justificó su presencia en el Diálogo por la Seguridad, al definir al PRI como una oposición responsable, al tiempo que advirtió que no se debe caer en el autoritarismo.⁷

El enervamiento de la sociedad, es una realidad lamentable.

En otras ocasiones hemos hecho notar que nuestra sociedad sufre ya un proceso de enervación. Esto significa que cada día tiene menos capacidad para reaccionar ante una realidad tan deprimente y desconcertante, como ocurre con los organismos vivos cuando pierden la habilidad para resistir el ataque de los elementos patógenos y de los microbios malignos, porque sus anticuerpos ya no actúan o han perdido su eficacia.

Es un hecho que existen razones sobradas para justificar esta suerte de saturación de la sociedad y del desconcierto que conlleva:

En la teoría, vivimos en un Estado de Derecho con una Constitución Política como referencia sustantiva y con leyes derivadas de ella que rigen la actuación de toda la sociedad y de autoridades legítimas obligadas a garantizar la seguridad y la integridad de nuestros bienes, así como de nuestras personas y de nuestras familias.

Pero en la realidad, todos los días podemos constatar que lamentablemente eso ya no es cierto porque la delincuencia actúa con una violencia y una prepotencia inauditas, lesionando impunemente nuestros derechos fundamentales. Continuamente sufrimos secuestros, chantajes, robos y exacciones de todo tipo.

Y además, los Medios de comunicación dan noticia de una corrupción indignante que pareciera abarcar a todas las autoridades sin excepción, porque un buen número de ellas se encuentran sometidas por la fuerza a la delincuencia, otras, actúan en connivencia con los criminales y otras más, son sus cómplices, no sólo en el robo de los bienes ---incluyendo los de las personas más humildes en el campo--- sino en el asesinato de niños, mujeres y ancianos, y de nuestros amigos y familiares.

*En estos días, un grupo de cobardes asesinos se presentaron en la casa del presidente municipal de Santiago, Nuevo León, **Edelmiro Cavazos** un joven idealista de apenas 38 años que ha sido arrancado de su hogar y ha aparecido horas después asesinado, amortajado con cinta canela con huellas evidentes de su tortura, dejando una viuda también joven y tres pequeños hijos. El asco de tan proditorio asesinato es incontenible cuando nos enteramos de que posiblemente han sido policías los que han perpetrado este crimen.*

Los representantes de la sociedad civil en estos foros han evidenciado su aturdimiento, su confusión e impotencia. ¿Qué pueden hacer además de canalizar su indignación mediante protestas enérgicas ante el Primer Mandatario de la Nación? cosa que hicieron sin ambages. Algunos de ellos recurrieron incluso a la propuesta de soluciones desesperadas, pobremente sustentadas, como la de la legalización de algunas drogas.

El deterioro de nuestro nivel de convivencia justifica el desconcierto:

En los años treintas del siglo pasado, en medio de la guerra civil para resistir la intentona gubernamental de erradicar las convicciones religiosas del pueblo, alcanzamos la cifra de sesenta homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Desde entonces, fueron bajando paulatinamente hasta que en el año 2007 llegaron a tan sólo once asesinatos dolosos, sobre la misma base.

Las últimas cifras son impresionantes: De 2007 a 2009 pasamos de once, a diecisiete, y en el 2010 vamos a terminar probablemente en veinticuatro homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con un incremento de más del 100% en ese indicador, en tan sólo tres años.

Si siguiéramos con esa tendencia, la proyección nos llevaría a un valor en ese parámetro, de cincuenta, que correspondería a sesenta mil asesinatos por año.⁸ Esos números significarían el doble de la tasa correspondiente actual en Colombia, sólo equiparables a los que sufren en los países con mayor número de asesinatos en América Latina: Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala y Jamaica.

Es indispensable afectar las finanzas del narcotráfico. (11/08/2010)

Ante la “dificultad” para detectar las finanzas provenientes del crimen organizado, el presidente **Felipe Calderón** adelantó que ya instruyó al secretario de Hacienda y Crédito Público, **Ernesto Cordero**, para que trabaje en el diseño de una nueva política en contra del lavado de dinero.

Para elaborar esta propuesta destacó que pidió “ayuda” al gobernador del Banco de México, **Agustín Carstens**, aunque de antemano dijo que respeta la autonomía de la institución.

“Sí estimo y coincido en que requerimos dar un salto en la materia, las unidades especializadas, la

Unidad de Lavado de Dinero concretamente de la Secretaría de Hacienda, ha tenido una actividad mucho mayor a la de otras épocas, pero también el desafío que hoy enfrentamos es considerablemente mayor al que se ha tenido en el país”, argumentó.

Durante la mesa del Diálogo por la Seguridad en la que estuvieron presentes los dirigentes nacionales de los partidos políticos, el Jefe del Ejecutivo reconoció que es complicado conseguir expertos en materia financiera que arriesguen incluso su vida para detectar las cantidades provenientes de la actividad ilícita del crimen organizado.

El presidente nacional del PRD, **Jesús Ortega**, sentenció que en la implementación de la política

de Estado se deben atacar “las redes financieras poderosas” que se benefician de las cantidades exorbitantes de dinero salido de la producción, distribución y consumo de drogas.⁹

El Presidente Calderón argumentó en contra de la legalización de las drogas. (11/08/2010)

Ante presidentes de los partidos políticos, en el Diálogo por la Seguridad. Hacia una Política de Estado, (el Presidente **Calderón**) dio más argumentos de su oposición a la legalización de las drogas, aunque aclaró que no se opone al debate.

Entre otros puntos, cuestionó que el consumo de drogas quede al libre albedrío de las personas. "No creo que un niño de 12 años, o de 11, o de 14, esté suficientemente informado y sea responsable para, simple y sencillamente rechazar las drogas que van a estar disponibles. Sé que están muy disponibles ahora, pero van a estar masivamente disponibles, en cada esquina. No me parece una decisión aprobable o conveniente".

En días pasados el ex presidente **Vicente Fox** dio a conocer un documento en el que apoya la legalización de las drogas y en el que considera que el consumo de estupefacientes es una responsabilidad personal de quienes los consumen, de la familia y del sistema educativo.

El ex mandatario planteó también retirar "a la brevedad" al Ejército del combate antinarcóticos.

En el mismo encuentro con partidos, el secretario de Seguridad Pública, **Genaro García Luna**, aludió a la inacción de la administración de **Vicente Fox**. En su intervención, el funcionario dijo: "Sólo basta decir que la Policía Federal, en la pasada administración, en registros oficiales no tiene ninguna detención de narcotraficantes ni secuestradores".

“Una ventaja es que empezamos a atacar el problema antes de lo que lo hicieron otros países, quizá mucho después de lo que a mí me hubiera gustado, la verdad. (Pero) si este problema se

hubiera tocado cuatro o cinco años antes, estaríamos en una situación mucho mejor”, dijo el mandatario durante el Diálogo por la Seguridad hacia una Política de Estado, en el que participaron los presidentes nacionales de los partidos políticos, con excepción del líder del PT.¹⁰

El PRI reclama se pretenda involucrar a miembros de ese instituto político con el crimen organizado, con fines electorales. (11/08/2010)

Al referirse al análisis histórico de cómo ha cambiado la morfología del crimen organizado y su modus operandi, la presidenta del CEN del PRI, **Beatriz Paredes Rangel**, sostuvo que cuando “se pretende distorsionar con la hipótesis de que ha cambiado, porque en tiempos pasados había complicidades de los gobernantes de determinada formación política, ya no se hace análisis, se hace política electoral”.

Beatriz Paredes subrayó que “éste no puede ser un debate maniqueo, donde de un lado están todos los buenos que quieren combatir el crimen organizado de una manera y, de otro lado, son todos malos si no quieren combatirlos. Entonces, no vamos a avanzar ni analizar nada”.

Dijo que es crucial si se quiere ser eficaces, no mezclar la naturaleza de los análisis. Precisó que en todos los regímenes políticos, en todas las etapas y en las formaciones políticas de diversas ideologías, “ha habido problemas de algunos individuos”.

Nadie puede responder por la honorabilidad de todos y cada uno de sus militantes, pero no (se) puede ni (se) debe generalizar, porque eso deteriora todo el quehacer político, precisó.

De plano, la señora **Paredes Rangel** dijo: “Y en el PRI tenemos una exigencia: cuando haya acusaciones tiene que haber pruebas y es indispensable que la autoridad actúe y si no, que se deje de hacer política y señalamientos que lo único

que hacen es desprestigiar la función de representación partidaria popular”.

Beatriz Paredes insistió ante el Ejecutivo Federal que se profundice y haya resultados en la investigación del crimen que padeció **Rodolfo Torre**, en Tamaulipas. “En materia de seguridad

pública, lo único que realmente importa son los resultados que son difíciles de alcanzar en un marco tan complejo, tenso “como el que hemos vivido y vaya que sí lo hemos padecido con el hecho de tener una baja muy sensible para nosotros”.¹¹

La impunidad evidente genera una gran decepción en la sociedad.

La situación es desconcertante y desalentadora, sobre todo porque no hay castigos, no hay justicia y no hay reparación del daño para las víctimas. La impunidad es tan alta que significa prácticamente una garantía para los delincuentes de que no serán castigados.

En el ámbito internacional el gran promedio de los sentenciados por homicidios dolosos es del más del sesenta por ciento de los casos. Pero, en México, las sentencias en tales casos llegaban hasta el 45% en 2005; al 40% en 2006 y 2007, y han caído hasta el 28% en el 2008. En los casos de las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez las sentencias por homicidios dolosos no llegan ni al 10% de los homicidios conocidos.

Esto es gravísimo porque tan alto grado de impunidad alienta la prepotencia y el cinismo de los delincuentes y agravia sin remedio a la sociedad que califica con razón al gobierno de incapaz. Independientemente de que algunos juzguen que esos inadmisibles resultados se deben a que el gobierno no sabe cómo resolver el problema, y otros a que está permeado con un insólito grado de corrupción que le impide cumplir con sus funciones.

*La contemplación de ese cuadro lleno de dramatismo y desolación es importante para entender la enorme decepción que deviene en desesperación y para comprender por qué la sociedad no se siente con ánimo para hacer eco a los llamados del Presidente **Calderón**, a la unidad y a la colaboración.*

Los expertos en seguridad pública además de reprochar la falta de información confiable ---deficiencia que el propio Presidente tuvo que admitir---, se mantuvieron en una actitud crítica que no pudo ser superada, menos aún cuando el propio Presidente, convocante de esos diálogos, se mostró impaciente ante las observaciones y sugerencias vertidas por algunos de los asistentes.

El formato de diálogos abiertos y públicos con grupos numerosos de asistentes con derecho a voz, no pareció ser el formato más adecuado para convencer a ellos y a la opinión pública de aceptar las posiciones del gobierno. Además, no fueron acompañadas de una propuesta integral, novedosa y coherente sino que dieron la impresión de estarse limitando a la ratificación de los posicionamientos que han venido ventilándose por parte de la presidencia desde el principio de esta administración, ciertamente con algunos ajustes pero sin presentar un cambio satisfactorio. Hasta ahora, el Diálogo ha tenido la deficiencia de no poder llegar a la estructuración de una ponencia que pudiera integrar las numerosas propuestas de los asistentes, muchas de ellas fruto de primeros intentos, lejanos del proceso maduro de reflexión, bien ilustrado, que está demandando la solución de este problema tan complejo.

A lo largo del evento en sus dos primeras semanas, con sendas sesiones para atender a seis grupos de la

sociedad, se dio la impresión de que el Presidente tampoco tenía la solución. En cierto momento pareció sumarse incluso a la posibilidad de legalizar ciertas drogas, aún cuando posteriormente rectificó diciendo que estaba en desacuerdo con la legalización pero que no le parecía mal que el tema se discutiera.

Los gobernadores de los estados se mostraron más positivos pero pidieron más recursos.
(13/08/2010)

José Reyes Baeza (PRI), gobernador de Chihuahua, propuso crear un fondo con recursos de aseguramientos al propio crimen organizado y de los tres órdenes de gobierno para dar becas a "los hijos de la violencia", porque derivado de la guerra contra el crimen organizado son miles de viudas y jóvenes que esperan justicia.

"Tenemos que romper la cadena de odio que existe entre los familiares de las más de 28 mil víctimas de violencia en el país, si le sumamos hijos, jóvenes, adolescentes, niños, viudas, estamos hablando de más de 100 mil personas que luego van a reproducirse perniciosamente en este ánimo de obtener venganza".

"Tenemos que poner en la mesa, Presidente, qué vamos a hacer con los huérfanos de esta guerra y con las viudas de esta guerra", dijo **Humberto Moreira Valdés** (PRI), gobernador de Coahuila.

Calderón dijo a los gobernadores que están a tiempo de derrotar al crimen, pero es necesaria la coordinación y el trabajo sin titubeos. Exigió apoyar el trabajo de "decenas de miles de efectivos de la Policía Federal, al Ejército y la Marina para ofrecer seguridad a los ciudadanos".

Marcelo Ebrard Casaubón (PRD), jefe de gobierno del DF, sugirió ir contra las finanzas de los narcotraficantes o de lo contrario, dijo, será difícil vencerlos en los próximos años, tema que secundó la perredista **Amalia García Medina**, gobernadora de Zacatecas. **Calderón** anunció que pronto presentará una estrategia contra el lavado de dinero y el flujo de efectivo.

"Debemos partir de asumir responsabilidades y no arrojar culpabilidades; de un acuerdo de confianza que destierre suspicacias de aquellos interesados en utilizar la estrategia de lucha contra el crimen como bandera de sus propios intereses", dijo **Fidel Herrera Beltrán** (PRI), de Veracruz.

Jesús Aguilar Padilla (PRI), de Sinaloa, llamó a "tomar las medidas legales, éticas y las necesarias para que no haya un uso electorero del problema de la seguridad pública, ni del ejercicio de los programas sociales, por ningún nivel de gobierno y por ningún actor, para poder caminar de acuerdo en esta gran cruzada".

"Yo agregaría: en los hechos", afirmó **José Guadalupe Osuna** (PAN), de Baja California, quien opinó que no es válido pretextar o argumentar que lo que ocurre en los estados "no es nuestra responsabilidad o competencia (...) en otras entidades, lo digo con todo respeto, no tendría por qué ser distinto".

Osuna dijo que a dos años del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008, sólo Sinaloa y Baja California han certificado a sus policías y están en vías el DF y Tamaulipas.

"El evidente desgaste de la actual estrategia de combate a la delincuencia nos obliga volver la vista hacia otras formas de ver el problema", afirmó **Leonel Godoy Rangel** (PRD), gobernador de Michoacán, tras admitir que "la procuración de justicia (en el país) se encuentra minada por la (misma) delincuencia organizada".

"Por eso, en lugar de señalarnos y, tal vez, mañana salir algunos en los medios de comunicación, como los más avanzados y otros los más ignorantes, o los más subdesarrollados, pongamos una reunión de trabajo, sin límite de tiempo, para

hacer una evaluación de lo que hemos cumplido o no cumplido", pidió **Zeferino Torreblanca** (PRD), gobernador de Guerrero.

El mandatario de Coahuila ofreció a **Calderón** "enterrar en este día las diferencias que han existido de un lado y de otro", lo que recogió **Calderón**: "Tomo, por supuesto, puntualmente, y aquilato en todo lo que vale el llamado del gobernador **Moreira**, de dejar atrás nuestras diferencias, enterrarlas, como dijo él, y trabajar unidos para restablecer la tranquilidad".

Emilio González, gobernador de Jalisco dijo: "La pregunta es si estamos solamente preocupados en fortalecer las instituciones públicas o tenemos también el interés y la visión de fortalecer algo que a mi entender es de mucho más fortaleza, como es el tejido social... se requiere de la prevención social a través de la educación, de empleo, de acceso a la cultura, a la salud, al deporte, a la recreación... Tenemos en nuestro sistema educativo una gran fortaleza que debemos orientar en la conformación de una sociedad solidaria para con todos los mexicanos, amante de la ley, con mexicanos positivos. Debemos aprovechar las vivencias, para que desde la teoría y la práctica en la escuela avancemos en el fortalecimiento de la comunidad".

Marcelo Ebrard, Jefe del Gobierno del D. F. dijo: "Yo me permitiría recomendar lo que tiene que ver con el combate al patrimonio y las utilidades de la delincuencia, a nivel nacional y en cada entidad federativa. Ya se aprobó la Ley de Extinción de Dominio Federal, nosotros tenemos la local, también algunas entidades federativas ya lo hicieron, pero lo cierto es, y que me parece que debería ser un objetivo nacional a conseguir, de manera que podamos elevarle el costo a sus operaciones y reducir su poderío económico"...

Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México dijo: "Todos reconocemos que ha habido avances importantes, ha habido logros. Pero también, sin caer en la autocomplacencia, reconocemos que no son suficientes ante lo que la ciudadanía espera de nosotros... Deseamos realmente que este diálogo trascienda y que no se quede en un ejercicio de catarsis, de opiniones y de propuestas muy importantes, interesantes, relevantes... en el Estado de México, y aquí quiero reiterar la disposición que hay para destinar mayores recursos al esfuerzo de la seguridad pública y que, deseamos, realmente vaya este esfuerzo compartido con los apoyos que en adición, deseamos, podamos recibir del gobierno federal".¹²

Los partidos de la Oposición no parecieran dispuestos a colaborar, asumiendo su propia responsabilidad.

*Los líderes de los partidos de la Oposición que asistieron a la quinta sesión del Diálogo, se mostraron sumamente críticos, de tal manera que se generó una tensión importante especialmente con las intervenciones de la señora **Beatriz Paredes**, líder del PRI y de **Jesús Ortega**, líder del PRD.*

*A la petición del Presidente a esos líderes de que se pronunciaran abiertamente acerca de si tenían razones para considerar que la obligación del gobierno, de mantener el Estado de Derecho, incluso mediante el uso de la fuerza legítima, había dejado de tener vigencia, la señora **Beatriz Paredes** dijo que no había unanimidad en los posicionamientos de las fuerzas políticas y que ponerlo de manifiesto, públicamente, ante el crimen organizado podría no ser estratégicamente conveniente y además, se mostró suspicaz dejando sentir que estos encuentros pudieran ser inútiles, limitados a formar parte de un montaje mediático.*

*Además, la señora **Paredes** prácticamente se negó, de manera terminante, a la aceptación de cualquier responsabilidad del instituto político que dirige por el crecimiento explosivo del gravísimo problema del*

narcotráfico, diciendo que no podía ser ese un debate maniqueo donde en un lado estuvieran los buenos --el Presidente y sus aliados que quieren combatir el crimen--- y del otro los malos ---donde se colocó ella implícitamente en la interpretación que hizo de la posición del Ejecutivo---. Porque entonces, dijo, no vamos a avanzar ni a analizar nada.

Luego con impecable razón dijo sin ambages: en el PRI tenemos una exigencia “cuando haya acusaciones tiene que haber pruebas, en cuyo caso es indispensable que la autoridad actúe y si no (hay pruebas) que deje de hacer política con señalamientos que lo único que hacen es desprestigiar la función de representación partidaria popular”.

*La situación es suficientemente confusa como para poder sacar fácilmente conclusiones del Diálogo porque, por ejemplo, en la sexta reunión, donde fueron convocados los gobernadores de los estados pertenecientes a todos los partidos, agrupados de alguna manera en la CONAGO, los mandatarios, en su gran mayoría, expresaron una voluntad mucho más definida que la evidenciada por los otros grupos, de participar de las preocupaciones y de los planes del Ejecutivo para combatir a la delincuencia organizada, habiéndose hecho notar en esa postura algunos gobernadores que en otras no pocas oportunidades se han distinguido por su oposición al Presidente, en algunas ocasiones con formas bastante destempladas. Fueron los casos de **Humberto Moreira Valdez**, (PRI, de Coahuila), **Leonel Godoy Rangel** (PRD, de Michoacán), y de **Enrique Peña Nieto** (PRI, Edomex).*

No resulta por tanto fácil adelantar cuáles serán los resultados de este Diálogo sobre todo los positivos, si es que los hay, ya que difícilmente se puede encontrar en ellos una cierta continuidad, y mucho menos alguna armonía en los posicionamientos que, por otro lado, han sido ciertamente variados, heterogéneos y en no pocas ocasiones contradictorios.

*El tema da para mucho y en la próxima edición de **Trama Política** trataremos de aprovechar las opiniones de algunos expertos en seguridad pública para tratar de llegar a algunas conclusiones acerca de este Diálogo al que tanto tiempo y esfuerzo le ha dedicado el Presidente, insistiendo una vez más, en el lugar privilegiado que le ha adjudicado a la lucha contra la delincuencia organizada a lo largo de toda su gestión, y en su voluntad de mantenerse en la línea adoptada desde el principio, decisión que sin duda alguna marcará este sexenio, para bien o para mal, si otro factor que pudiera inducir un cambio dramático no aparece.*

Claves del documento

Preámbulo.

Opiniones.

- *Opiniones*
- Hechos
- **Actores**

Fe de erratas.

Notas al final del documento

¹ Jorge Ramos Pérez, El Universal, 3 de agosto del 2010.

² Mayolo López, Luis Brito y Rolando Herrera, Reforma, 3 de agosto del 2010.

³ Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 4 de agosto del 2010.

⁴ Jorge Ramos, El Universal, 4 de agosto del 2010.

⁵ Lorena López y Leticia Fernández, Milenio Diario, 5 de agosto del 2010.

⁶ Daniel Lizárraga, Revista Proceso, 8 de agosto del 2010.

⁷ Lorena López y Miriam Castillo, Milenio Diario, 11 de agosto del 2010.

⁸ Datos y proyecciones proporcionados por el Consejo para la Seguridad.

⁹ Tania Rosas, El Economista, 11 de agosto del 2010.

¹⁰ Horacio Jiménez y Jorge Ramos, El Universal, 11 de agosto del 2010.

¹¹ Bertha Becerra, El Sol de México, 11 de agosto del 2010.

¹² Jorge Ramos y Gerardo Mejía, El Universal, 13 de agosto del 2010.